

Causa	Ruc 18- 4-0154684-3	Rit T-195-2018
Materia	Tutela de derechos fundamentales Despido injustificado	
Procedimiento	Aplicación general	
Demandante	Samuel Antonio Alborno Sánchez	C.I. 7.709.238-2
Abogados	Nicolás Ruz Palacios	C.I. 16.870.426-7
	Teresa Andrea Cavalla Penroz	C.I. 12.004.661-6
Demandado	Ilustre Municipalidad de Río Claro	Rut 69.110.700-0
Abogado	Hugo Fabián Parra Cáceres	C.I. 16.001.892-5
Ingreso	18 de diciembre de 2018	
Aud. de juicio	11 de noviembre de 2019 14 de enero de 2020	
Juez que falla	Juan Marcelo Bruna Parada	

Talca, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO.

Primero: Partes del juicio. Que son partes en este juicio laboral sobre tutela laboral y despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, Ruc 18- 4-0154684-3, Rit T-195-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, don SAMUEL ANTONIO ALBORNOZ SÁNCHEZ, domiciliado en San Gerardo 255, Río Claro, como demandante; e ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, persona jurídica de derecho público, representada por su alcalde don Américo Gustavo Guajardo Oyarce, ambos domiciliados en Calle Casimiro Sepúlveda 01, Cumpeo, comuna de Río Claro, como demandada.

Segundo: a) Demanda de tutela laboral. Comparece don Samuel Antonio Alborno Sánchez, quien interpone demanda de vulneración de derechos fundamentales, despido injustificado, y cobro de prestaciones e indemnizaciones en contra de su ex empleador, la Ilustre Municipalidad De Río Claro, representada por su alcalde, don Américo Gustavo Guajardo Oyarce, señalando.

Originalmente ingresó a trabajar para la Ilustre Municipalidad de Río Claro el año 1981, con el cargo de docente, se desempeñó hasta el año 1999 en dichas funciones, al final de dicho año, por motivos profesionales, se alejó del servicio para desempeñarse en la Ilustre Municipalidad de Andacollo. Esta interrupción se extendió durante todo el año 2000.

Posteriormente, volvió a trabajar para la Ilustre Municipalidad de Río Claro el 6 de marzo del año 2001 en calidad de Director Santa Herminia Los Robles. Así, en estricto rigor y para efectos del cálculo de prestaciones que más adelante



se detallarán, la fecha de inicio de su relación laboral con la demandada es el 6 de marzo de año 2001.

Luego de ganar un proceso concursal el 1 de marzo de 2013 fue designado como Director de la Escuela Odessa de la comuna. En su paso por los establecimientos de Río Claro ejerció en el Liceo Río Claro -antes del 2000-, en Los Robles y finalmente en la escuela Odessa hasta la fecha de su despido.

En este último establecimiento tuvo un desempeño impecable. En efecto logró generar un proyecto educativo de grandes fortalezas, así su desempeño nunca estuvo expuesto a mayores inconvenientes, con excepción de las situaciones que se describirán.

Hace presente que su última remuneración pagada ascendió a \$1.560.896, sin perjuicio de que según explicará más adelante de acuerdo a la ley su remuneración debía ascender a la suma de \$1.722.174, remuneración que deberá ser considerada para efectos de las indemnizaciones que reclamo.

Exposición clara y circunstanciada de los hechos anteriores y coetáneos al término de la relación laboral y constitutivos de la vulneración.

Con la intención de contextualizar la vulneración de derechos de que fue objeto se hace necesario precisar algunos hechos:

A finales de 2014 y con ocasión de la licenciatura de los cursos de 8° básico algunos alumnos acudieron a la ceremonia con una deplorable presentación personal, en razón de aquello y del acuerdo del equipo docente y docente directivo dichos alumnos fueron sancionados con la entrega en privado de su licencia media, dicho incidente dio excusa al Alcalde de la comuna para instruir la realización de un primer sumario administrativo en su contra a principios de 2015, el cual estuvo plagado de una serie de inaceptables irregularidades. Por ejemplo, se nombró un fiscal, don Gonzalo Montero Viveros, el cual fue prontamente reemplazado, sin ningún motivo justificado, por otro funcionario recientemente contratado en el DAM respectivo y que era cercano al Alcalde, don Adolfo Martínez Henríquez. Dado que, en un sumario administrativo, el fiscal hace a la vez de juez y parte, claramente la idea de objetividad y de juez natural quedaba groseramente entredicho desde el comienzo mismo del pseudo sumario que recién iniciaba.

La mañana del 18 de mayo de 2015 concurrió a la Oficina del área Psicosocial a hablar con doña Alejandra Pérez Maurer, quien era actuaria en el

sumario que se llevaba en su contra, para retirar copias del expediente del sumario a fin de revisarlas con su abogado. La señorita actuaría estaba visiblemente ocupada, nerviosa y apurada y muy poca atención puso a su presencia, le entregó las copias y se retiré. Tres días después se contactó telefónicamente indicando que había perdido el expediente del sumario y quería saber si él lo tenía.

En ese preciso instante no tomó mayor atención, pero el asunto fue escalando y prontamente se dio cuenta de que, al parecer, al no poder expulsarlo con el poco riguroso sumario administrativo que habían inventado, ahora lo estaban nada más y nada menos que acusando de hurtar el expediente.

Que los hechos negativos no se prueban de modo que ante esta situación no le quedaba más que su palabra: “yo no fui”, no admitiéndose más prueba que eso pues lamentablemente ese día él andaba solo y tampoco había cámaras de seguridad que pudieran aclarar el hecho.

Así las cosas, la caza de brujas prosiguió, se le denunció ante el Ministerio Público (denuncia prontamente archivada por lo infundada que resultaba) y se instruyó un segundo sumario administrativo. Ahora los cargos se basaban en el hurto del expediente. El decreto alcaldicio que inicia este nuevo sumario es el N° 3344 de 8 de octubre de 2015.

Este nuevo sumario, que concluyó con su desvinculación, se inicia el 8 de octubre de 2015. Tres años antes de su despido.

La referida investigación está compuesta por los decretos que inician el sumario, aceptación del cargo del fiscal, un mail suyo, y luego la declaración de Alejandra Pérez Maureira -la actuaría que lo acusaba de hurtar el expediente, única supuesta testigo de los hechos, quien a su vez era la responsable de custodiar el expediente y no perderlo- de fecha 13 de octubre de 2015.

Luego de esas 8 fojas no hubo absolutamente ningún movimiento hasta más de un año después, específicamente el 15 de noviembre de 2016 en que aparece un decreto alcaldicio corrigiendo el procedimiento y constituyendo nuevamente la fiscalía. En esa fecha se le toma declaración, el 28 de noviembre -de lo poco que se acordaba pues se estás hablando de un año de retraso, y luego nuevamente el proceso queda estancado.

Desde noviembre de 2016 el proceso se mantuvo sin ningún movimiento hasta el mes de enero de 2018. Durante todos estos tres largos años estuvo

formal y públicamente en la posición de acusado, nada menos que por ladrón. Estuvo además por largo tiempo suspendido de sus funciones.

En definitiva, estuvo tres años bajo sumario administrativo. Y como decía, desde noviembre de 2016 no se hizo ni el más mínimo esfuerzo por avanzar en la investigación.

A esta altura, y con el pasar de los años, su expectativa razonable era que para su empleador el asunto no revestía mayor gravedad y que por tanto se respetaría su contratación, su trayectoria y su estabilidad laboral. En otras palabras, que -sin perjuicio de no existir falta alguna de su parte- para su empleador simplemente habría operado el perdón de la causal, conclusión más que razonable dada la pasividad constatada en el sumario administrativo por tan lato periodo de tiempo.

Sin embargo, para su sorpresa, con fecha 17 de enero de 2018 el alcalde emite un decreto para cambiar nuevamente de fiscal. El nuevo fiscal realiza una actividad probatoria consistente en:

a.- Declaración de Pía Gajardo Matamala: Abogada y funcionaria del servicio. Supuestamente es testigo en el sumario pero en verdad, solo declara lo que sabe de oídas, de hecho de su propia declaración se puede leer que cuando ocurrieron los hechos tanto el fiscal como la actuaria Alejandra Perez Maureira le “manifestaron que el inculpado Sr. Samuel Albornoz, una vez que le fueran formulados los cargos y al haber solicitado este copia de la carpeta investigativa se llevó el expediente original hasta su domicilio”. Indica además que la propia Srta. Alejandra Pérez Maureria le solicitó acompañarla a Curicó a visitar a su abogado de ese entonces para recuperar el expediente. O sea, en realidad no es una testigo, es una subordinada en el equipo jurídico que lo acusaba, y aun así, ni siquiera fue testigo de los hechos sino que simplemente reproducía lo que le había contado la Srta. Pérez Maureira.

b.- Declaración de Adolfo Martínez Henríquez: Fiscal ad-hoc de quien ya habló al comienzo de este libelo, amigo del alcalde designado especialmente para expulsarlo del Servicio el año 2015 a través del cuasi-sumario que se realizó en aquella ocasión y cuyo expediente perdió. También declara que lo que conoce de los hechos, lo conoce porque es lo que le contó la Srta. Pérez Maureira.

c.- Una carta de 25 de mayo de 2015, suscrita por Martínez Henríquez y Pérez Maureira, en la que le indican que esta última lo señala como responsable de sustraer el expediente y lo invitan a devolverlo.

d.- Un mail del mismo tenor anterior, dirigido a su abogado de aquel entonces José Luis Cisterna Fauré, suscrito por Pérez Maureira.

e.- Acta de diligencia que da cuenta de la visita de Pérez Maureira y su subordinada Gajardo Matamala a la oficina de mi ex abogado, José Luis Cisterna Fauré.

Así, con el mérito de estos testimonios, finalmente se le despidió, comunicándosele el fin de la relación laboral con fecha 26 de octubre de 2018.

Hace presente que el Decreto alcaldicio que resolvió su despido fue el N° 3195 de 4 de octubre de 2018, sin embargo, interpuso recurso de reposición de modo que su despido definitivo se produjo a través del Decreto N° 3427 que rechazó la reposición, el cual es de fecha 25 de octubre de 2018.

Transcribe los decretos referidos.

Indicios de vulneración.

Se debe tener en mente que los acontecimientos que fundamentan este libelo están relacionados con los eventos que motivaron ambos sumarios administrativos en su contra, sin embargo, en estricto rigor la vulneración de derechos fundamentales se produjo durante la tramitación del segundo sumario administrativo concluyendo en su resolución final, pues fue ahí donde formalmente se le tildó de ladrón a lo largo de tres insufribles años. En definitiva, la vulneración ocurrió durante la relación laboral y también con ocasión del despido. Así, los indicios de vulneración son:

1) A comienzos del año 2015 se realizó un muy arbitrario sumario administrativo, en donde la funcionaria que hacía de actuario en dicho sumario, responsable del expediente, lo perdió y me culpó a mí por ello.

2) Se le realizó un segundo sumario administrativo, el que trajo aparejada la suspensión de mi empleo y que se extendió por más de tres años.

3) Durante este período no existió ninguna voluntad por dar pronto término al sumario que se llevaba a cabo en mi contra, en efecto, el expediente sumarial llegó a pasar años completos sin el más mínimo avance.

4) La afrenta pública llevada en mi contra llegó al punto que mi ex empleador me denunció ante el Ministerio Público para efectos de enviarme a la cárcel, acusación que fue prontamente archivada por infundada.

5) Su ex empleador, finalmente lo despidió basado únicamente en el testimonio un testigo, siendo esta la actuaria que perdió el expediente de mi primer sumario -o sea, un testigo claramente interesado-, además de otros dos funcionarios que eran parte del equipo acusador -incluido el fiscal acusador del primer sumario-, los que únicamente declararon de oídas con respecto a lo que dicha actuaria les había contado.

6) Su despido se produjo tres años después de iniciado el sumario administrativo en mi contra, en circunstancias que razonablemente era esperable que dado el desinterés del empleador en perseguir mi supuesta responsabilidad, debía presumirse perdonada la causal.

7) En la tramitación del sumario que culminó con su despido no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la ley 18.883 que dispone plazo de 20 días para la investigación. En su caso y según he expuesto la investigación que culminó con el terminó de su relación laboral se extendió por casi tres años.

Refiere consideraciones de derecho.

En cuanto a la vulneración de derechos y el primer derecho conculcado.

i.- Derecho a la Honra consagrado en el artículo 2 del Código del Trabajo.

Que con respecto al derecho a su honra puede señalar que ella es un concepto externo, la visión que los demás tienen respecto de la respetabilidad de que goza una persona; es el conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona merezca y reciba la consideración de los demás. El derecho a la protección de la honra tiene una dimensión de hetero estima, por el aprecio de los demás de los actos y comportamientos de la persona, y una dimensión de autoestima, por la conciencia de autenticidad del accionar, protegiendo la integridad de la persona, sus actos y comportamiento social. Que la honra u honor no es sólo la reputación o buena fama de la persona ante terceros y la sociedad, sino que se relaciona también con sus actos y comportamiento. Se deshonra o afecta el honor de la persona, degradándolo, cuando proyecta actos y comportamientos que construyen una reputación falsa, y desarrolla actos y comportamientos que vulneran sus compromisos y obligaciones familiares y sociales.

Que, en el caso concreto, se le desvinculó vejatoriamente, se le trató de ladrón sin respeto a los principios del debido proceso. Se vulneraron garantías básicas como el respeto a los plazos del proceso de sumario administrativo que se le realizó.

Se le sancionó sin más prueba que la de un testigo que a la vez era juez y parte -o por lo menos testigo interesado- pues se trataba de la actuaria Pérez Maureira, quien lo acusó de hurtar un expediente que ella misma perdió, que ella misma debía resguardar y del que ella misma era responsable. Toda la actividad probatoria del sumario que lo despidió se basó en el testimonio de esta misma persona.

En este punto cabe mencionar que el punto máximo de la persecución y trato denigrante que se le profirió, estuvo en el momento en que su empleador quiso enviarlo a la cárcel. Afortunadamente, en dicha ocasión las instituciones funcionaron correctamente y el Ministerio Público archivó rápidamente la muy temeraria y calumniosa denuncia.

Que en este sentido el artículo 485, del Código del ramo, que prescribe: "el procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 1 y N°4 cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador".

El trato injurioso que le otorgó su ex empleador, afecta gravemente su reputación y honorabilidad, carece de justificación y constituye una acción deshonrosa hacia su persona conforme a la prescripción del artículo 493 del Código del Trabajo, que dispone: "cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad".

Que el modo en que la denunciada ha vulnerado sus derechos fundamentales, lo autorizan a ejercer la acción de tutela laboral y de conformidad con el artículo 485 del Código del Trabajo, según el cual el empleador resulta especialmente obligado a respetar el derecho constitucional a la honra de la persona, lo que en mi caso no se hizo.

ii.- En cuanto al segundo derecho conculcado, la integridad psíquica.

Desde una perspectiva amplia, el derecho fundamental a la integridad psíquica es uno de los aspectos más importantes, de entre aquellos que el demandado lesionó con su actuar antijurídico. Esto es así porque dentro del abanico de daños que el ser humano puede tolerar, el soporte psíquico es la base de comprensión en donde recaerán todos los demás daños, y en definitiva, el punto neural donde convergen todos los daños. El daño, ya sea el daño físico, social, económico, moral -o cualquier otra clasificación que las ciencias sociales o naturales puedan crear- siempre va a converger en el soporte psíquico del ser humano y, a partir de ahí, se va a somatizar en diversas respuestas sobre el soporte biológico, o conductual, cuyas consecuencias serán tan graves como insospechadas. En doctrina se puede consultar el artículo de Claudio Palavecino Cáceres relativo al acoso psíquico laboral:

“Según informa Hirigoyen, la sintomatología es bastante típica: cuando el acoso es incipiente los síntomas de la víctima son parecidos al estrés (cansancio, nerviosismo, insomnio, jaquecas, trastornos digestivos, lumbalgias, etc.) con una peculiaridad: el sentimiento de impotencia, de humillación y la idea de que “no es normal”.

Si el acoso continúa y se intensifica la persona acosada puede caer en un estado depresivo mayor, caracterizado por sentimientos de tristeza, baja autoestima, culpa y abulia, incluso con riesgo suicida. A lo anterior se añade una gran diversidad de trastornos psicosomáticos que se van agravando en la medida que el acoso progresa: la víctima adelgaza o engorda mucho y rápidamente, sufre problemas digestivos (gastralgias, colitis, úlceras gástricas) o endocrinos (alteraciones de la tiroides, desarreglos menstruales), hipertensión arterial incontrolable, vértigos, enfermedades de la piel, etc. Si el acoso se prolonga durante varios meses o años deja huellas indelebles en la personalidad del acosado, que pueden ir desde el estrés postraumático a modificaciones psíquicas severas. La persona puede desarrollar una neurosis traumática o incluso llegar a la psicosis” (Palavecino Cáceres, Claudio. (2004). La Protección Contra el Acoso Psíquico Laboral en el Ordenamiento Jurídico Chileno. Revista de derecho (Valdivia), 17, 63-89.<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502004000200003>).

En efecto, la conducta del demandado, desde el momento en que se propuso su objetivo de expulsarlo del establecimiento educacional, se tradujo en

un acoso o mobbing laboral, intenso, con publicidad dentro y fuera del establecimiento, con injurias graves que lo llevaron incluso a denunciarlo ante el Ministerio Público por causa de un hecho que se le imputó sin la más mínima base fáctica. Recordar que se le denunció por parte de una persona que, a su vez, sería probablemente sancionada por perder el expediente del sumario administrativo y que en consecuencia tenía urgente necesidad de culpar a alguien más, y basado en ese testimonio, su ex empleador maquinó toda la persecución que en este libelo se expone. Esta persecución prosiguió por un período de tres años, en donde su empleador en una actitud tormentosa hacia su persona, no daba curso progresivo al sumario a fin de dejarlo en este limbo jurídico que tanto tiempo tuvo que soportar.

Los efectos psicosomáticos de los actos de su ex empleador ya dieron resultados en su persona, de hecho, ante la situación de que ha sido víctima ha tenido que acudir a diversos médicos pues el año 2006 tuvo un infarto al miocardio, de modo que en su condición no puede estar sometido a estrés -situación conocida por su ex empleador-. Así, tuvo que recurrir a atención neurológica para tratar su cuadro emocional diagnosticado como “stress grave, crónico, por acoso laboral” según su doctor el Sr. Carlos Flores Montero. En su estado físico también ha repercutido y, en general, todo ha sido consecuencia de la verdadera destrucción emocional a la que he sido sometido.

En cuanto al perdón de la causal.

Un aspecto muy relevante, que guarda relación con las arbitrariedades cometidas y con lo injustificado del despido, es lo relativo al perdón de la causal.

Esta institución, elaborada a partir de lo que se conoce como “consolidación de las situaciones” y el “reconocimiento de la voluntad presunta”, tiene sentido en el marco de una relación laboral respetuosa de los principios protectores del trabajador y de la estabilidad laboral.

Básicamente, se trata de que ante el incumplimiento de alguna norma de la empresa, que justifique el despido de un trabajador, es posible que el empleador decida no considerar grave la situación o bien optar por otro tipo de reprimenda o advertencia que no necesariamente implicará un despido. Ahora, en el evento de que el empleador nada diga en un plazo prudente, es razonable que el trabajador entienda que se ha condonado la falta.

A este respecto, la jurisprudencia no ha establecido márgenes de tiempo estrictos para definir “desde cuando” debe entenderse perdonada la falta. Sin embargo, se pueden sacar ciertas conclusiones, por ejemplo, en autos Rit O-104-2015 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, la sentencia -confirmada por Corte de Apelaciones y Corte Suprema- consideró injustificado el despido por haber demorado el empleador un total de tres meses en efectuar el despido desde la respectiva falta. Transcribe considerandos pertinentes.

En cuanto a la calificación del despido.

Conforme a la narración de los hechos su despido no es más que un acto vulneratorio de sus derechos fundamentales, que vulnera los principios de las leyes laborales en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo en relación con el artículo 485 del mismo, además de ser un despido injustificado.

Para que un despido pueda ser calificado como justificado, es necesario que se encuadre dentro de una de las específicas causales previstas por la ley en el Art. 159 y siguientes del Código del Trabajo. En el caso de autos, su ex empleador quiso justificar mi despido en la causal del Art. 72 letra b) del Estatuto Docente.

En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor.

Este a su vez, según el decreto que resuelve su despido, sería constitutivo de la causal prevista en el Art. 160 numeral 1 letra a) del Código del Trabajo.

A partir de la lectura del decreto que resolvió su despido, ninguno de estos requisitos se cumplió, de modo que el despido no puede más que calificarse de injustificado. Además de fundarse según ha explicado previamente en hechos falsos.

En primer término, no se respetó lo indicado en la normativa del Estatuto docente, pues lo que se supone debía hacer mi empleador era acreditar las faltas a la probidad “establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883”.

De lo expuesto en este libelo ha quedado en claro que 1) La supuesta falta a la probidad no se estableció fehacientemente, pues se basó en un único testimonio de una persona que era testigo interesado, o que incluso podría

considerarse juez y parte, y 2) tampoco se respetó el procedimiento establecido en la ley N° 18.883.

En segundo lugar, tampoco se respetó lo dispuesto en el Art. 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, por los mismos motivos ya expuestos, pues no se respetaron ni los más mínimos principios del debido proceso y de la objetividad de un juez natural que pudiera decidir con respecto a la situación que me aquejaba. Es más, se obviaron antecedentes claves, como el hecho de que el Ministerio Público archivó la causa de mi supuesto hurto, por lo infundado de la denuncia. En definitiva, se le imputaron hechos falsos, no se comprobaron fehacientemente y en ningún caso existieron antecedentes suficientes para justificar su despido.

Siendo el despido entonces injustificado, y habiéndose utilizado la causal contemplada en el Art. 160 numeral 1 letra a) del Código del Trabajo, procede que se aplique el aumento del cien por ciento de la indemnización conforme lo dispuesto en el Art. 168 del Código del Trabajo.

Del daño Moral.

La relación de trabajo es típicamente una relación de poder y, por lo mismo, impone derechos y obligaciones que utilizados en forma abusiva pueden causar daños patrimoniales y extrapatrimoniales, la doctrina y la jurisprudencia están contestes en que existen situaciones excepcionales en las cuales puede plantearse la necesidad de reparar el daño moral cuando se configura un despido abusivo.

Un despido injustificado o erróneo no es, en principio, abusivo. El despido abusivo alude a un despido excepcionalmente antijurídico, caso en el que según hemos expresado anteriormente nos encontramos.

Hoy la tanto doctrina como jurisprudencia están contestes en que es plenamente pertinente la acumulación de una indemnización del daño moral por despido abusivo con las establecidas por el derecho laboral para el término del contrato de trabajo, ya que la llamada indemnización tarifada sólo cubre el daño patrimonial del despido, por lo cual resulta de toda lógica la necesidad de indemnizar el daño moral por ejercicio abusivo del despido con una indemnización complementaria. Así la existencia de un régimen específico de indemnización tarifada por término de contrato no autoriza para concluir, a contrario sensu, que en materia laboral no rige el principio de reparación integral del daño.

Por las razones anteriores, se ha tendido a aceptar uniformemente la posibilidad de acumular, a la indemnización tarifada legal por término de contrato, otra de daños y perjuicios morales cuando éstos adquieren cierta relevancia y entidad.

Este es el camino que ha seguido la jurisprudencia nacional. En el año 2011, la Corte Suprema en el caso "Suazo con Codelco Chile" Rol Corte 7.270-09, reiteró la tesis de la procedencia de una indemnización por daño moral extracontractual producido por un despido abusivo. La Corte precisó que las indemnizaciones tarifadas legales del derecho del trabajo no excluyen, en casos especiales y si se prueban perjuicios extraordinarios, como sería el caso del daño moral de un trabajador abusivamente despedido, que pueda acumularse una indemnización adicional por el perjuicio moral. La Corte señala que la responsabilidad cuasidelictual civil puede originarse del ejercicio de un derecho cuando éste se realiza sin el debido fundamento, esto es, en forma abusiva y causa daño a un tercero. Esto último, por cuanto los derechos subjetivos tienen una finalidad y han de ejercerse de acuerdo a esos fines. Si alguno, apartándose de tales objetivos y de los postulados generales, ejerce un derecho negligentemente y en el evento que cause daños a terceros, debe indemnizarlos. Este es el caso del empleador que procede al despido de uno de sus subordinados en un contexto que claramente no admitía proceder de ese modo, sea porque se funda en una causal que la ley no ha previsto, porque resulta una medida inapropiada o desproporcionada o, porque precisaba autorización previa.

Respecto de las indemnizaciones tarifadas laborales la Corte Suprema indica que no ha de ignorarse que, según sean las circunstancias del caso, el despido tendrá mayor o menor repercusión en el ámbito personal del exonerado y, habida cuenta, además, que las indemnizaciones reguladas en el ordenamiento especial del trabajo se caracterizan por ser tarifadas, esto es, que equivalen a un estándar mínimo de reparación, no quitan que sobre las mismas pueda determinarse la existencia de un perjuicio que, por su mayor dimensión relativa, amerite ser demostrado y resarcido en ese margen no satisfecho. De suerte que es perfectamente viable acumularlas con otras que digan relación con los daños correlativos que acredite quien las demanda.

El despido de que he sido objeto le ha producido un daño psicológico y emocional derivado fundamentalmente de la absoluta falta de motivación para ello,

o peor aún, de la injuriosa motivación que se le presentó, y que se publicitó a viva voz por parte de las autoridades municipales, llegando incluso a intentar enviarle a la cárcel. Ello le ha generado una lesión extrapatrimonial que no debe ni tiene que soportar y que debe ser reparada a través de la respectiva indemnización de los perjuicios sufridos.

Esta posibilidad según expresó está ampliamente reconocida en doctrina, ya que los efectos lesivos de un incumplimiento contractual pueden producir daño moral y este debe resarcirse, lo anterior se ve reafirmado con redacción del N°3 del art.495 del código del trabajo, referente a que la sentencia debe contener la indicación de las medidas a que se encuentra obligado el infractor, “incluidas las indemnizaciones que procedan” sin hacer distinción alguna siendo plenamente procedente la satisfacción del daño moral sufrido como consecuencia de la privación ilegal de mi trabajo; de las circunstancias irregulares de mi despido las que me han dañado emocionalmente y que debe ser reparada por mi empleadora.

Remuneraciones adeudadas:

1) Asignación tramo:

De acuerdo con lo prescrito en los artículos 47 y 48 de la ley N° 19.070, los profesionales de la educación del sector municipal tienen derecho a percibir, entre otras, una asignación de experiencia, la que se devengará por cada dos años de servicios docentes efectivos, continuos o discontinuos, prestados tanto en el ámbito público como en el particular.

Enseguida, cabe consignar que la ley N° 20.903, que “Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica Otras Normas”, incorporó en la ley N° 19.070, un nuevo Título III denominado “Del Desarrollo Profesional Docente”, sistema que, según lo prescrito en el artículo 19 A de la ley N° 19.070, distingue dos fases del desarrollo profesional docente, la primera estructurada en tres tramos -tramo profesional inicial, temprano y avanzado-, y una segunda etapa que consta de dos tramos de carácter voluntario -tramo experto I y experto II-.

Pues bien, la ley N° 20.903, reguló, en el Párrafo 2° de sus disposiciones transitorias, la transición al nuevo sistema de desarrollo profesional docente para los profesionales que, a la entrada en vigencia de la ley en estudio, se desempeñaran en el sector municipal.

En efecto, la aludida normativa indicó, en los artículos noveno y décimo transitorio, que los servidores en comento serían asignados a los tramos del

desarrollo profesional docente considerando los años de experiencia profesional y el resultado obtenido en alguno de los instrumentos indicados por la mencionada preceptiva. En tal sentido, el inciso primero del artículo decimosexto transitorio de la ley N° 20.903 dispone que los profesionales de la educación que se desempeñen como directores de establecimientos educacionales o como jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal serán asignados al tramo profesional avanzado. Agrega en su inciso segundo que “Sin perjuicio de lo anterior, los directores o jefes de Departamento de Administración de Educación Municipal cuyos resultados en los instrumentos de evaluación, indicados en el artículo décimo transitorio, y experiencia profesional les permitan ser asignados a un tramo más alto que el profesional avanzado, serán asignados al tramo que les corresponda de acuerdo a sus resultados”.

Siendo el suscrito Director a la época de la dictación de la recién citada normativa correspondía que su empleador informara en el SIGE, que es el sistema de Información General de Estudiantes, SIGE, es la plataforma Web que dispone y utiliza el Mineduc para integrar en un solo lugar toda la información de los Sostenedores, Establecimientos Educacionales, Docentes, Asistentes y alumnos. En ella se integran procesos tales como: Pre matrícula, Matrícula inicial, Asistencia alumnos, Declaración de asistencia, Actas de rendimiento a contar de año 2009, Pro retención, Idoneidad Docente y Asistentes de la Educación del Establecimiento y del Sostenedor, el tramo en que me encontraba de manera de que se me pagase la denominada “asignación pro tramo”.

El Artículo 49° del DFL N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, modificado por Art. 1 N° 32 de la Ley 20.903 cuya entrada en vigencia al efecto se produce el 1 de julio de 2017 establece la denomina asignación por tramo que es un monto diferenciado en conformidad al tramo de desarrollo profesional alcanzado por cada docente y que tiene por propósito promover el desarrollo profesional docente y reconocer los avances logrados en la carrera docente.

El monto de la Asignación por Tramo se determina en base a tres componentes:

a) Componente de experiencia, cuyo monto es igual a la asignación de experiencia.

b) Componente de progresión: monto que depende del tramo en que se encuentra el docente y sus valores máximos para un contrato de 44 horas y 15 bienios.

En su caso su empleador le informó al SIGE como subdirector, según acreditará en el proceso y no como Director cual era efectivamente su cargo, por lo que le fueron canceladas durante el año 2017 solo \$304.048 y no \$ 472.923 como corresponde según la ley a un director con 15 bienios y en tramo avanzado.

Por ello su empleador le adeuda la suma de \$161.278 mensuales desde el mes de julio de 2017 a la fecha y que hasta el mes de noviembre de 2018 ascienden a la suma de \$ 2.741.726.

2) Descuento ilegal remuneraciones:

En su liquidación de remuneraciones del mes de octubre su empleador de manera ilegal procede además a descontar de su remuneración la suma de \$301.798 indicando “descuento sumario”, desconociendo el suscrito de manera absoluta a que se refiere dicho descuento siendo además absolutamente ilegal por parte de su empleador, por lo que deberá ser condenado a su restitución.

Indemnización por lucro cesante:

Teniendo presente que en virtud de su designación indefinida gozaba de estabilidad laboral a lo menos hasta que cumplierse los 65 años hasta el 24 de noviembre de 2021, y a raíz del término anticipado e indebido ejecutado por su ex empleadora (26.10.2018), demanda por el referido concepto los 36 meses de estabilidad laboral que gozaba, los que equivalen a la suma de \$61.998.264, según paso a explicar:

Su decreto de nombramiento y la ley determinan que su contratación y vinculación con la demandada era de planta, es decir tendría a lo menos una extensión temporal hasta que cumplierse los 65 años, edad en la que podría optar a la jubilación por vejez, es por tal razón que por concepto de lucro cesante demanda las remuneraciones por el lapso de tiempo estimativo como de duración de su designación en calidad docente dependiente del Municipio demandado, esto es, hasta el 24 de noviembre de 2021, correspondiente a las remuneraciones correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2018 hasta noviembre de 2018, ambos meses inclusive, (36 meses).

Desde el punto de vista argumentativo, la pretensión del tiempo que resta para el término de su nombramiento, se infiere o deriva de los siguientes razonamientos:

a) Desde un punto de vista jurídico, el contrato de trabajo impone a los contratantes la obligación de cumplir a cabalidad las obligaciones recíprocas que contraen. Dicho contrato es ley para las partes (1.545 del C. Civil), debe además ejecutarse de buena fe (art. 1.546 del C. Civil), e impone al contratante incumplidor la obligación de indemnizar al contratante diligente por los perjuicios que le haya ocasionado (art. 1.489 del C. Civil).

b) En el caso particular, y sin perjuicio de los demás conceptos demandados, los perjuicios se encuentran representados en el hecho de que, al haber sido despedido en forma indebida y anticipada, se interrumpió la relación laboral en forma anticipada y sin motivo legal, en claro detrimento del trabajador.

c) Asimismo, el art. 1.556 del C. Civil dispone la obligación del contratante incumplidor de indemnizar el “lucro cesante”, el que en el caso de autos se haya representado por las remuneraciones íntegras hasta a lo menos la fecha en que podría acogerme a jubilación por vejez.

d) Por todo lo anterior, le asiste el derecho a ser indemnizado con el pago de la totalidad de las remuneraciones a que tendría derecho hasta la fecha en que cumpliera los 65 años de edad.

Refiere jurisprudencia sobre la procedencia de la Indemnización por lucro cesante en materia laboral.

Declaraciones y prestaciones demandadas.

A) Declaración: Que entre las partes existió una relación estatutaria, regulada por el Código del Trabajo, continua e ininterrumpida desde el 6 de marzo de 2001 y hasta el 26 de octubre de 2018 en virtud de la cual el suscrito prestó servicios de director de escuela y docente dependiente de la Ilustre Municipalidad de Río Claro.

B) Declaración: Que al momento de su despido su remuneración mensual ascendía a \$1.722.174.-

C) Declaración: Que el despido se produjo con fecha 26 de octubre de 2018.

D) Declaración: Que el término de relación laboral por parte de la ILUSTRE Municipalidad de Río Claro es consecuencia de un acto arbitrario e ilegal,

vulneratorio de mi derecho a la honra e integridad psíquica, lo que vulnera las disposiciones del artículo 2 del Código del Trabajo, lo que se ha producido con anterioridad al despido, con ocasión del mismo y además se ha prolongado con posterioridad a este.

E) Declaración: Que además el despido del que fui objeto es injustificado por basarse en motivaciones falsas y ajenas a la realidad que en modo alguno justifican legalmente el término de mi contrato.

F) Declaración: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores la Ilustre Municipalidad De Río Claro debe ser condenado a pagar las siguientes indemnizaciones y prestaciones:

i) Indemnización sustitutiva del aviso previo: En atención a que mi despido no se realizó con la debida anticipación exigida por el artículo 161 del Código del Trabajo, la Ilustre Municipalidad de Río Claro debe ser condenada a pagarme la indemnización correspondiente equivalente a \$1.722.174-.

ii) Indemnización por años de servicio: Como consecuencia de lo anterior y considerando que la relación laboral se extendió entre el 6 de marzo de 2001 y el 26 de octubre de 2018, la Ilustre Municipalidad de Río Claro debe ser condenada a pagarme la indemnización correspondiente a los años de servicio, a que se refiere el artículo 163 del Código del Trabajo, equivalente a \$18.943.914.

iii) Aumento del artículo 168 inciso tercero del Código del Trabajo: Por haberse invocado injustificadamente la causal del Art. 160 N° 1 letra a), procede que el aumento en la indemnización precedente llegue al cien por ciento, esto es \$18.943.914, o en subsidio el ochenta por ciento conforme a la letra c) del inciso segundo del Art. 168 en comento, que asciende a \$15.155.131.

iv) Indemnización especial del artículo 489 del Código Del Trabajo: La que corresponde al tratarse de un despido gravemente vulneratorio, considerando el variopinto número de derechos fundamentales involucrados y la publicidad vejatoria que se hizo de los mismos durante tan largo tiempo, y que pido S.S. fije en el máximo legal esto es en el equivalente a 11 meses de mi última remuneración mensual esto es la suma de \$18.943.914o la suma que S.S. estime.

vi) Reajustes e intereses: Además solicita se sirva condenar a la demandada, al pago de los reajustes; y hecho lo anterior, aplicar el interés legal, según lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. - o la suma de se

estime pertinente según el mérito de autos, a todas y cada una de las prestaciones demandadas anteriormente.

vii) Daño moral: Correspondiente a la reparación de mis aflicciones y pesares producto mi despido, y la precaria situación en que el despido me deja, estimo que deben ser ejemplar y íntegramente reparadas por lo que demando a dicho título la suma de \$40.000.000 (cuarenta Millones de Pesos).

viii) Remuneraciones adeudadas: Correspondientes a las diferencias de asignación por tramo desde julio de 2017 a la fecha y ascendentes a \$ 2.741.726.- y la suma de \$301.798 por el descuento ilegal realizado en mi remuneración en el mes de octubre de 2018.

ix) Lucro cesante: Teniendo presente que en virtud de su designación indefinida gozaba de estabilidad laboral a lo menos hasta que cumplierse los 65 años hasta el 24 de noviembre de 2021, y a raíz del término anticipado e indebido ejecutado por su ex-empleadora (26.10.2018), demando por el referido concepto los 36 meses de estabilidad laboral que gozaba, los que equivalen a la suma de \$61.998.264.

x) Multas: Que se ordena la aplicación a las demandadas de las máximas multas que establece la Ley para las infracciones legales en que incurrió.

xi) Sanción accesorio: Que se disponga a la demandada durante el plazo de dos años de ejecutoriado el fallo, la prohibición de participar en licitaciones y/o concursos públicos, según lo establecido en la Ley N° 19.886 y N° 20.238.

xi) Costas: Todo lo anterior con expresa condenación en costas de su ex empleadora y demandada de autos.

b) Demanda subsidiaria de despido injustificado. En subsidio de la demanda interpuesta en lo principal interpone demanda de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones en contra de la Ilustre Municipalidad de Río Claro, por las razones de hecho y de derecho que pasa a exponer:

Los hechos. Por motivos de economía procesal, en este apartado doy por expresamente reproducidos para todos los efectos legales, todos los antecedentes de hecho expuestos en la presentación principal de este libelo.

El derecho. Por motivos de economía procesal, en este apartado da por expresamente reproducidos para todos los efectos legales, todos los antecedentes de derecho expuestos en la presentación principal de este libelo que no digan relación con la vulneración de derechos, sin perjuicio de agregar que:

En cuanto a la calificación del despido.

Conforme a la narración de los hechos su despido no es más que un acto injustificado.

Para que un despido pueda ser calificado como justificado, es necesario que se encuadre dentro de una de las específicas causales previstas por la ley en el Art. 159 y siguientes del Código del Trabajo. En el caso de autos, mi ex empleador quiso justificar mi despido en la causal del Art. 72 letra b) del Estatuto Docente, el que señala:

“Artículo 72: Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales:

b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.

En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor.

Este a su vez, según el decreto que resuelve mi despido, sería constitutivo de la causal prevista en el Art. 160 numeral 1 letra a) del Código del Trabajo, el que señala:

“Art. 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones”.

Como SS., podrá constatar a partir de la lectura del decreto que resolvió mi despido, ninguno de estos requisitos se cumplió, de modo que el despido no puede más que calificarse de injustificado. Además de fundarse según he explicado previamente en hechos falsos.

En primer término, no se respetó lo indicado en la normativa del Estatuto docente, pues lo que se supone debía hacer mi empleador era acreditar las faltas

a la probidad “establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883”.

De lo expuesto en este libelo ha quedado en claro que 1) La supuesta falta a la probidad no se estableció fehacientemente, pues se basó en un único testimonio de una persona que era testigo interesado, o que incluso podría considerarse juez y parte, y 2) tampoco se respetó el procedimiento establecido en la ley N° 18.883.

En segundo lugar, tampoco se respetó lo dispuesto en el Art. 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, por los mismos motivos ya expuestos, pues no se respetaron ni los más mínimos principios del debido proceso y de la objetividad de un juez natural que pudiera decidir con respecto a la situación que me aquejaba. Es más, se obviaron antecedentes claves, como el hecho de que el Ministerio Público archivó la causa de mi supuesto hurto, por lo infundado de la denuncia. En definitiva, se me imputaron hechos falsos, no se comprobaron fehacientemente y en ningún caso existieron antecedentes suficientes para justificar mi despido.

Siendo el despido entonces injustificado, y habiéndose utilizado la causal contemplada en el Art. 160 numeral 1 letra a) del Código del Trabajo, procede que se aplique el aumento del cien por ciento de la indemnización conforme lo dispuesto en el Art. 168 del Código del Trabajo.

Del daño Moral. Reitera lo planteado en la demanda principal.

Declaraciones y prestaciones demandadas.

A) Declaración: Que entre las partes existió una relación laboral regida por el Código del Trabajo, continua e ininterrumpida desde el 6 de marzo de 2001 y hasta el 26 de octubre de 2018 en virtud de la cual el suscrito prestó labores como Director Titular de escuela, dependiente de la Ilustre Municipalidad de Río Claro.

B) Declaración: Que al momento de su despido su remuneración mensual total alcanzaba la suma de \$1.722.174.-

C) Declaración: Que el despido se produjo con fecha 26 de octubre de 2018.

D) Declaración: Que el despido del que fui objeto es injustificado por basarse en motivaciones falsas y ajenas a la realidad que en modo alguno justifican legalmente el término de su contrato.

E) Declaración: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores la Ilustre Municipalidad de Río Claro debe ser condenado a pagar las siguientes indemnizaciones y prestaciones:

i) Indemnización sustitutiva del aviso previo: En atención a que mi despido no se realizó con la debida anticipación exigida por el artículo 161 del Código del Trabajo, la Ilustre Municipalidad de Río Claro debe ser condenada a pagarme la indemnización correspondiente equivalente a \$1.722.174.-

ii) Indemnización por años de servicio: Como consecuencia de lo anterior y considerando que la relación laboral se extendió entre el 6 de marzo de 2001 de y hasta el 26 de octubre de 2018, la Ilustre Municipalidad de Río Claro debe ser condenada a pagarme la indemnización correspondiente a los años de servicio, a que se refiere el artículo 163 del Código del Trabajo, equivalente a \$18.943.914.-

iii) Aumento del artículo 168 inciso tercero del Código del Trabajo: Por haberse invocado injustificadamente la causal del Art. 160 N° 1 letra a), procede que el aumento en la indemnización precedente llegue al cien por ciento, esto es \$18.943.914, o en subsidio el ochenta por ciento conforme a la letra c) del inciso segundo del Art. 168 en comento, que asciende a \$15.155.131.-

iv) Reajustes e intereses: Además solicito a S.S. se sirva condenar a la demandada, al pago de los reajustes; y hecho lo anterior, aplicar el interés legal, según lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. - o la suma que se estime pertinente según el mérito de autos, a todas y cada una de las prestaciones demandadas anteriormente.

v) Daño moral: Correspondiente a la reparación de mis aflicciones y pesares producto mi despido, y la precaria situación en que el despido me deja, estimo que deben ser ejemplar y íntegramente reparadas por lo que demando a dicho título la suma de \$40.000.000 (cuarenta Millones de Pesos)

vi) Remuneraciones adeudadas: Correspondientes a las diferencias de asignación por tramo desde julio de 2017 a la fecha y ascendentes a \$2.741.726 y la suma de \$301.798 por el descuento ilegal realizado en mi remuneración en el mes de octubre de 2018.

vii) Lucro cesante: Teniendo presente que en virtud de mi designación indefinida gozaba de estabilidad laboral a lo menos hasta que cumpliese los 65 años hasta el 24 de noviembre de 2021, y a raíz del término anticipado e indebido ejecutado por mi ex-empleadora (26.10.2018), demando por el referido concepto

los 36 meses de estabilidad laboral que gozaba, los que equivalen a la suma de \$61.998.264.

viii) Costas: Todo lo anterior con expresa condenación en costas de su ex empleadora y demandada de autos.

Tercero: Contestación de la demanda. Comparece don Hugo Fabián Parra Cáceres, Abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Río Claro, quien contestando la demanda solicita su rechazo, señalando.

Solicita desde ya se niegue lugar a la denuncia por supuesta vulneración de derechos fundamentales presentada por el trabajador, controvirtiendo todos y cada uno de los "hechos" y "antecedentes" que según la demandante las configura, atendido a que varios de ellos nunca sucedieron, es decir, existe falsedad de los hechos constitutivos del indicio; otros sucesos o circunstancias- si bien acaecieron, sin embargo han sido malinterpretadas, sacados de contexto y obedecen a causas distintas de aquellas expuestas en la demanda y respecto de otros que si bien existieron, la conducta de la Municipalidad de Río Claro obedeció a una motivación legítima y así se declarará que dichos "hechos" y "antecedentes" expuestos por la contraria fueron torcidos y dirigidos antojadizamente a intentar estructurar indicios de vulneración de derechos, todo lo que hará concluir al tribunal el rechazo de la acción iniciada, con costas.

Respecto a los hechos ocurridos a finales de 204 con motivo de la licenciatura del Octavo Básico y el sumario iniciado por ello, y que tal acto sería vulneratorio de derechos fundamentales.

Dichos hechos son completamente falsos principalmente porque el demandante se encontraba vinculado a la Municipalidad por un vínculo de derecho público, en su calidad de director, en calidad de planta, por lo que ante los reclamos realizados el Alcalde tiene la obligación legal de instruir un sumario administrativo que bajo ningún punto de vista pasa a ser una excusa, puesto que como todo sumario debidamente tramitado conlleva un periodo de investigación el cual quedó de manifiesto que los hechos denunciados eran reales, y más allá de si le parece o no al demandante, en el caso de marras pasa a ser una discriminación abiertamente arbitraria, al no permitir a menores de edad que estuvieran en su licenciatura, lo cual no solo colisiona con derechos de los hijos, si no que así mismo de los padres, quienes detentan el cuidado de estos y no pudieron ver a sus hijos como el resto de los padres debido a una decisión tomada

arbitrariamente, lo cual queda de manifiesto en el sumario administrativo.-

Señala la demandante que existe una amistad entre los fiscales y el Alcalde, y que fue uno de ellos reemplazado sin motivo alguno, en circunstancias que es de público conocimiento que el fiscal reemplazado fue don Manuel Montero, el cual es actualmente Seremi de Vivienda y Urbanismo y por lo mismo dejó de prestar servicios en la Municipalidad, razón por la cual no podía si no que nombrarse un fiscal en su reemplazo.

Señalar que un fiscal es juez y parte en un sumario administrativo es caer en un error de gran magnitud, puesto que de ser así, todos los sumarios administrativos tramitados en nuestro país vulnerarían el debido proceso, y por consecuencia ni siquiera podríamos señalar que estamos en un estado de derecho, por lo cual dichas aseveraciones no son más que de falsedad absoluta.-

Respecto a los hechos ocurridos el 18 de mayo de 2015 cuando el demandante concurrió hasta la oficina de la actuaria del sumario a solicitar copia del expediente sumaria. Los hechos relatados por el demandante, no son como él los señala, en primer término puesto que se encuentra señalado que el demandante concurre inequívocamente donde la Srta. actuaría doña Alejandra Pérez, y es en dicha actuación se apropia y sustrae la carpeta investigativa, no era inventada, constituye así mismo una presunción de legitimidad la actuación de la ministro de fe en sumario administrativo, por lo que existe una inversión de la carga probatoria en base a lo expuesto adicional a lo expuesto como si no fuera poco existen testigos de los hechos, cuyos testimonios fueron debidamente ponderados conforme a las reglas de la sana crítica que contempla la legislación administrativa en materia sancionatoria.

Respecto a la caza de brujas e inactividad del sumario que refiere el actor, no son ciertos, puesto que dichas actuaciones constan en sumario administrativo debidamente tramitado, el cual producto de una pérdida de este solo prolongó la tramitación de tal procedimiento, teniendo además en consideración que los funcionarios que tramitan este tipo de procedimientos, tienen por Ley encomendadas funciones distintas a esta, máxime que los plazos son fatales para las partes y no para la administración, así mismo que como funcionarios públicos, deben prestarse a la función pública tendiendo a cubrir contingencias, privilegiando el interés general por sobre el particular, y no puede tomarse en consideración puesto que solo por generar una molestia en el demandante implica

que eso puede ser una vulneración, se intentó la reconstitución del sumario administrativo extraviado, lo cual fue preponderante para la tramitación y prolongación de este.

Todos los hechos mencionados por el actor respecto a la tramitación del sumario y sus apreciaciones de la decisión, son incorrectos, puesto que tal como se dijo latamente, fue desvinculado conforme a un proceso sumarial debidamente tramitado.

En cuanto a la justificación de la causal de término de relación laboral.

Como se ha expresado, ha existido por parte de la I. Municipalidad de Rio Claro, la tramitación correcta de dos sumarios administrativos que se ordenaron instruir mediante decreto alcaldicio N° 3942 de 29 de diciembre de 2014, por denuncias realizadas por las apoderadas doña Claudia Concha, doña Mónica Dote y doña Mariela Espinoza, consta en dicho expediente sumarial que el demandante de autos, en su calidad de Director del Liceo Odessa impidió que tres alumnos, permitieran participar en la ceremonia de licenciatura, lo que constituye un acto discriminatorio y arbitrario, sin justificación lo que causó angustia en sus familias, como también en los menores, puesto a que se debía a un corte de pelo, el motivo de tal privación.

Tal acto constituye arbitrariamente un acto discriminatorio puesto, que carece de una objetividad, dicha discriminación como también priva de la oportunidad para poder defender sus derechos por parte de los menores y o sus representantes, así mismo es un acto de claro abuso de autoridad, quien amparado en su calidad de Director de establecimiento vulnera el bien superior del niño al excluir a estos niños de su licenciatura entendiéndose como paso final en dicho establecimiento educacional.

Dicho proceso sumarial con fecha 15 de abril de 2015 declaró cerrada la investigación, en la cual a juicio del fiscal instructor de dicho sumario, le ha cabido participación en calidad de autor material lo que queda en evidencia a través de diversos testimonios que se encuentran incorporados en el sumario en comento.

Así mismo el sumario instruido por decreto alcaldicio 3344 de fecha 08 de octubre de 2015, el cual fue instruido a fin de esclarecer la responsabilidad administrativa por la pérdida del sumario anteriormente detallado (D.A 3942), lo cual queda de manifiesto, por las declaraciones contestes de la Ministro de Fe de sumario administrativo, como así mismo de dos personas más, todos contestes en

que el inculpado el mes de mayo de 2015 sin motivo alguno sustrajo y se apropió de la carpeta original de sumario administrativo, por lo que dicha actuación trajo consigo un retardo en la tramitación del primer sumario incoado en contra del inculpado, y demandante de autos.

Dichos hechos acreditados, no lograron ser desvirtuados, asimismo sumado al actuar doloso del señor Albornoz hacen que haya caído a juicio del fiscal instructor en una falta de probidad de carácter grave infringiendo las obligaciones previstas entre otras la del art 58 de la ley 18.883, el cual ordena el cumplimiento cabal al principio de probidad regulado por ley y que en el caso en particular no se obedeció, razón por la cual es desvinculado en virtud de lo prescrito en el art 71 del estatuto docente que hacen incurrir al inculpado y demandante de autos en la sanción contemplada en el Art. 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo.

El principal argumento esgrimido por la contraria es que fueron conculcados sus derechos en especial el derecho a la honra y la integridad psíquica.

Derechos fundamentales supuestamente conculcados.

El derecho a la honra.

El demandante, no reconoce que el proceso sumarial fue llevado en completa reserva, no solo por intención del fiscal instructor, si no que por imperativo legal, el que sienta que lo sindicaron como ladrón, por llevarse a cabo un proceso para esclarecer hechos que pueden revestir incluso carácter de delito no conlleva en momento alguno conculcación de garantías fundamentales, es más, no conlleva vulneración alguna el regirse por un proceso sumarial para esclarecer hechos, puesto que en ningún momento se le tildó bajo ningún epíteto, solo existieron hechos procesales que dieron cuenta a los ojos del fiscal una transgresión al deber funcionario de ceñir su comportamiento al principio de probidad. Es más, es él quien vulnera derecho y garantías fundamentales, de los menores a quienes discriminó, producto del cual obliga a que se esclarezcan los hechos a fin de determinar posibles responsabilidades.

Bienestar psíquico.

Intentar impetrar un supuesto daño psicológico ocasionado por la tramitación de un sumario, impediría en lo absoluto que pudiese tramitarse este tipo de procedimientos en alguna parte del país, implicando una vulneración a susceptibilidades por la sola apreciación subjetiva del individuo del cual se lleva a cabo dicho proceso, es en razón de lo mismo que en el título anterior que es dable

preguntarse ¿habrá pensado en cómo podía dañar psicológicamente a los niños al discriminarlos? ¿Habrà pensado en el daño de sus familias, al no permitir que se licenciaron con sus compañeros de toda la vida?, ante los ojos de la lógica, un sumario no puede constituir si no un procedimiento tendiente a esclarecer responsabilidades, mas no un daño y mucho menos psicológico

Otros antecedentes a considerar.

Útil se hace tener presente que el demandante en su narrativa de los hechos omite, ex profeso, señalar que durante la vigencia de los dos sumarios que existieron en su contra y no obstante haberse decretado en los mismos la suspensión de su cargo este siempre recibió en forma íntegra y oportuna el total de su remuneración.

Del mismo modo, resulta extraño comprender que, si consideraba que las medidas o actuaciones tomadas al interior de los sumarios incoados en su contra vulneraban sus derechos, por qué no presentó ante el propio municipio o ante las entidades administrativas, (Inspección del Trabajo o Contraloría General de la República) algún reclamo o queja respecto al punto. Lo cierto es que no existe ninguna actuación del actor en donde el haya hecho saber la existencias de estas supuestas vulneraciones de derechos, que hoy reclama.

Por último es dable también indicar que las conductas desplegada por el Sr. Samuel Albornoz al interior de la I. Municipalidad de Río Claro fueron objeto de una querrela criminal presentada por esta casa edilicia ante la Fiscalía Local de Talca, en causa Rit 2465-2016, causa en la cual, dada la gravedad del asunto, se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado y en donde se fijó audiencia de formalización por el delito de Fraude al Fisco, para el día 09 de julio de 2019, oportunidad donde el Sr. Albornoz, no obstante estar notificado, justificó su inasistencia con un certificado médico, fijándose como nueva fecha el 10 de septiembre de 2019 a las 09:00 horas.

En cuanto a la demanda indemnizatoria adicional solicitada:

En efecto, no existiendo en la especie vulneración de un Derecho Fundamental ni incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato vínculo legal para con la I. Municipalidad de Río Claro, en los términos tan imprecisos planteados en la demanda, procedería negar lugar a la pretensión indemnizatoria reclamada por la demandante, con costas.

Así las cosas, y tal como se advierte de esta contestación, no es posible

concluir que en la Municipalidad de Río Claro se hayan producido hechos que signifiquen la vulneración de un derecho fundamental respecto del demandante considerando también que la Municipalidad que representa puso término a la relación contractual, en virtud de sendos sumarios administrativos llevados a cabo y en los cuales se determinó la responsabilidad administrativa del Sr. Samuel Albornoz, razón por lo cual dicha demanda debería ser rechazada en todas sus partes, con costas.

b) Contestación de la demanda subsidiaria de despido injustificado.

Comparece don Hugo Fabián Parra Cáceres, Abogado, quien en subsidio contesta la demanda por despido injustificado solicitándose el rechazo del mencionado libelo en todas y cada una de sus partes en razón de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que pasa a exponer:

Tal como ha quedado de manifiesto en lo principal de esta presentación, se describe con detalle el motivo y causal por el cual fue despedido, por lo cual y a fin de no incurrir en inútil reiteración de hechos y alegaciones y en virtud del principio de economía procesal, solicita tener por reproducidas también todas las argumentaciones fácticas y las contenidas en lo principal de esta presentación. No obstante lo anterior esta parte estima pertinente alegar respecto del libelo deducido lo siguiente:

El sumario fue debidamente tramitado constando cada una de las piezas con la debida autorización del ministro de fe y respetando los derechos que le correspondían al inculpado de recurrir en los momentos que la ley lo permite.-

La Jurisprudencia judicial como administrativa, ha sido conteste en orden a entender cuando existe una causal que afecta a algún funcionario que falta gravemente a la probidad, como en el caso de marras, corresponde la aplicación de las normas invocadas debidamente en el sumario, que terminaron con la desvinculación del demandante.-

Que dichas normas son art 58 de la ley 18.883, el cual ordena el cumplimiento cabal al principio de probidad regulado por ley y que en el caso en particular no se obedeció, razón por la cual es desvinculado en virtud de lo prescrito en el art 71 del estatuto docente que hacen incurrir al inculpado y demandante de autos en la sanción contemplada en el Art. 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo.

En ese orden de ideas, la Contraloría ha reconocido que la ponderación

de los medios de prueba, así como el grado de participación de los inculpados y la calificación de la falta, deben ser ponderados por quien sustancia el sumario y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, y no por la Entidad Fiscalizadora. En concordancia con lo anterior, mediante el dictamen N° 80.501 de 2013, la Contraloría ha señalado que el legislador ha radicado en aquel (en el caso de marras el alcalde), en su calidad de máxima autoridad del ente edilicio y titular de la potestad disciplinaria, las más amplias facultades para ponderar las circunstancias que ameriten imponerlas conforme a lo advertido en el proceso (aplica criterio contenido en el dictamen N° 54.004, de 2013)

Así las cosas, corresponde ponderar al órgano administrativo los hechos de sumario, lo cual a todas luces deja de manifiesto que existe una causal legal tipificada que ordena la destitución del demandante, si no que así mismo no corresponde que un Tribunal vuelva a ponderar si los hechos relativos a un proceso que se encuentra fenecido, puesto que dado el orden de ideas, la vulneración se produce según la contraria con ocasión del despido, pero en ese orden dicho despido fue legalmente tramitado, por lo que consecuentemente no existe ni vulneración ni tampoco despido injustificado.

En consecuencia y conclusión a todo lo anterior, el órgano de administración activa, goza de autonomía para ponderar, determinar e interpretar que hechos constituyen una vulneración grave al principio de la probidad administrativa, por lo que cualquier intento de encubrir una destitución respaldada por un proceso debidamente tramitado, pasan a ser ante los ojos del legislador, elucubraciones que no gozan de ningún asidero jurídico.

Cita normas legales y concluye solicitando tener por contestada la demanda subsidiaria de despido injustificado y cobro de prestaciones, deducida en contra de la I. Municipalidad de Río Claro, y en mérito de los argumentos esgrimidos y los medios de prueba que se aportaran en la etapa procesal correspondiente, rechazar en definitiva en toda y cada una de sus partes el libelo respectivo, con expresa condenación en costas

Cuarto: Actuaciones procesales. El 5 de agosto de 2019 se llevó a efecto la audiencia preparatoria, en la que llamadas las partes en gesto de conciliación, esta no se produjo. Acto seguido se recibió la causa a prueba dictándose el correspondiente auto de prueba.

El 11 de noviembre de 2019 y el 14 de enero de 2020 se llevó a efecto la audiencia de juicio, incorporándose la prueba rendida por las partes, quedando la causa en estado de fallo.

Se fijó el día 31 de enero de 2020 para la actuación de notificación de la sentencia.

Quinto: Prueba de la parte demandante. Que la parte demandante en la audiencia de juicio incorporó en forma legal los siguientes medios de prueba.

Prueba documental.

1. Copia de "Decreto N°3427", de fecha 25 de octubre del año 2018, emitido por la Municipalidad de Rio Claro, el alcalde Américo Guajardo.

2. Copia de "Decreto N°3195", de fecha 04 de octubre del año 2018, emitido por la Municipalidad de Rio Claro.

3. Copia de "Decreto exento N°3344", de fecha 08 de octubre del año 2015, emitido por la Municipalidad de Rio Claro.

4. Copia de "Decreto Alcaldicio N°264", de fecha 02 de mayo del año 2013, emitido por la Municipalidad de Rio Claro.

5. Copia de "Ordinario N°2122", de fecha 24 de septiembre del año 2015, emitido por el director Comunal de educación de Rio Claro Hugo Seaton.

6. Copia de "Ordinario N°1501", de fecha 19 de noviembre del año 2018, emitido por el director Comunal de educación de Rio Claro Hugo Seaton Ponce, incluye adjunto Copia de "Ordinario N°58", de fecha 14 de noviembre del año 2018, emitido por el la Encargada de Remuneraciones DAEM de Rio Claro Yanet Oyarce Morales, liquidaciones de remuneraciones del actor período Octubre de 2017 a Octubre de 2018 y una solicitud firmada por Samuel Albornoz con fecha 8 de noviembre de 2018.

7. Copia de ingreso al "Sistema información general de estudiantes (SIGE)", RBD: 3039 Escuela Odessa.

8. Copia de "Notificación" de fecha 08 de noviembre del 2018.

9. Informe médico de fecha 05 de noviembre del año 2018, emitido por el Dr. Carlos Flores Montero, Neurología Adultos.

10. Certificado de fecha 05 de noviembre del año 2018, emitido por el Dr. Iván Palma Díaz, Cardiología Adultos.

11. Escrito de Don Samuel Albornoz Sánchez, recepción 22-5-2015.

12. Escrito de Don Samuel Albornoz Sánchez, a Don José Joaquín Lagos León, solicitando copia del sumario administrativo instruido a través de Decreto Alcaldicio N°3344, el 07 de agosto de 2018.

13. Declaración de fecha 28 de noviembre del año 2016, suscrito por Samuel Albornoz Sánchez, Fiscal José Hernández González y actuaría María Paz Del Valle Valdés.

14. Formulación de cargos, de fecha 26 de abril del 2018, suscrita por Actuario Luis Silva Navarrete y Abogado Fiscal Instructor José Joaquín Lagos León.

15. Copia de "Reservado N°01/2015", de fecha 09 de octubre del año 2015, emitido por Don José Hernández González, Jefe de Administración y Finanzas DAEM Rio Claro - Fiscal a Don Hugo Seaton Ponce, Director Comunal de Educación Rio Claro.

16. Copia de mail "Comunica inasistencia", enviado por Don Samuel Albornoz Sánchez a Don Hugo Seaton Ponce, Director Comunal de Educación Rio Claro, en fecha 09 de octubre de 2015.

17. Copia de Informe de fecha 19 de octubre del año 2015, emitido por Don José Hernández González, Jefe de Administración y Finanzas DAEM Rio Claro-Fiscal.

18. Copia de declaración de fecha 13 de octubre del año 2016, de la Srta. Alejandra Andrea Pérez Maureira.

19. Copia de Decreto N°3892, de fecha 04 de octubre del año 2018, emitido por la Municipalidad de Rio Claro, el alcalde Carlos Guajardo Díaz, solicita corregirse procedimiento sumarial.

20. Copia de Ordinario N° 01, de fecha 24 de noviembre del año 2016, emitido por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Rio Claro, Constitución de Fiscalía.

21. Copia de Reservado N°01, de fecha 24 de noviembre del año 2016, firmado por Don José Hernández González, Fiscal y la Srta. María José Reyes Oyarce, actuaría.

22. Copia de Decreto N°172, de fecha 17 de enero de 2018, emitido por la Municipalidad de Rio Claro, el alcalde Américo Guajardo Oyarce, cambia de Fiscal

Instructor en Sumario Administrativo.

23. Copia de aceptación de cargo de fecha 15 de febrero del año 2018, suscrito por Don José Joaquín Lagos León, Abogado DAEM Rio Claro.

24. Copia de notificación de fecha 22 de febrero del año 2018, suscrito por Don José Joaquín Lagos León, Abogado DAEM Rio Claro, indica que ha sido notificado a Don Luis Silva Navarrete de su designación como Actuario y Ministro de Fe.

25. Copia de citación de fecha 01 de marzo del año 2018, suscrito por Don José Joaquín Lagos León, Abogado DAEM Rio Claro.

26. Copia de declaración de fecha 08 de marzo del año 2018, suscrito por don José Joaquín Lagos León, Abogado DAEM Rio Claro, declaración de la Srta. Pía Gajardo.

27. Copia de citación de fecha 15 de marzo del año 2018, suscrito por Don José Joaquín Lagos León, Abogado DAEM Rio Claro, cita a prestar declaración en calidad de testigo a Don Adolfo Martínez Henríquez.

28. Copia de constancia de fecha 29 de marzo del año 2018, suscrito por don José Joaquín Lagos León, Abogado DAEM Rio Claro.

29. Copia de declaración de fecha 12 de abril del año 2018, suscrito por Don José Joaquín Lagos León, Abogado DAEM Rio Claro, declaración de Don Adolfo Martínez Henríquez.

30. Copia de resolución de fecha 19 de abril del año 2018, firmado por Don José Joaquín Lagos León, Abogado, DAEM Rio Claro.

31. Copia de declaración de fecha 25 de mayo del año 2018, de don Adolfo Martínez Henríquez, fiscal a Don Samuel Albornoz Sánchez.

32. Copia de mail "sumario administrativo Samuel Albornoz Sánchez", enviado por la Srta. Alejandra Pérez Maureira, a Don José Luis Cisterna Fauré, en fecha 26 de mayo de 2015.

33. Copia de "Acta de diligencia" de fecha 27 de mayo del año 2015, firmado por don Adolfo Martínez Henríquez, fiscal y Srta. Alejandra Pérez Maureira, actuaría.

34. Copia de resolución de fecha 03 de abril del año 2018, firmado por Don José Joaquín Lagos León, Fiscal y Luis Silva Navarrete, Actuario; declaran cerrada la etapa sumarial del sumario administrativo.

35. Copia de Formulación de cargos, de fecha 26 de abril del 2018, suscrita por don José Joaquín Lagos León fiscal instructor, don Luis Silva Navarrete actuario y otra firma ilegible.

36. Captura de pantalla de la ficha "Historia" de la Oficina Judicial Virtual del poder judicial, de causa Rit Ordinaria 2465-2016 del Juzgado de Garantía de Talca.

Exhibición de documentos.

1. Sumarios administrativos ordenados mediante Decreto Alcaldicio N° 3942, de fecha 29 de diciembre de 2014 de la I. Municipalidad de Río Claro y Decreto Alcaldicio de la I. Municipalidad de Río Claro N° 3344 de 08 de octubre de 2015.

2. Se solicitó exhibir el Reglamento de Convivencia Escolar, de la escuela Odessa de Río Claro, con certificación efectuada por el Secretario Municipal que acredite que corresponde al vigente durante el año escolar 2014. El demandado se excusó de la exhibición por no existir tal reglamento.

En cuanto al apercibimiento solicitado, se rechazará tal solicitud por no ser el documento de aquellos que el legislador exige como obligatorios al empleador y que sean propios de una relación laboral.

Oficio.

1.- Oficio remitido por Contraloría Regional del Maule.

Prueba testimonial.

1.- Compareció don José Luis Cisterna Faure, quien legalmente interrogado, expuso:

Que es abogado. El año 2015 don Samuel lo consultó en su oficina en su calidad de abogado, respecto de una investigación sumaria llevada en su contra. El sumario se situaba en un contexto en el hecho de ser adversario político con la familia Guajardo, siendo alcalde uno de sus integrante.

En un ensayo de licenciatura unos alumnos llegaron con un corte de pelo no autorizado. Los alumnos fueron licenciados pero abajo del escenario. A raíz de esto se le inició al demandante un sumario por discriminación.

Don Samuel le llevó los cargos del sumario y las copias del sumario. Él le hizo una minuta de contestación de cargos. Los cargos lo trataban de encuadrar en falta de probidad. Luego de desentendió del asunto por problemas de honorarios.

A los días después recibió una llamada por un abogado de Río Claro quien le manifestó que su cliente, el Sr. Albornoz Sánchez, se había robado el expediente sumarial.

Al cabo de unos días llegó a su oficina la actuaria del sumario, quien le venía a pedir la copia del sumario. La actuaria le manifestó que se le había perdido el sumario original y no tenía copia.

Esto ocurrió durante el año 2015.

Contrainterrogado, expuso: La persona que lo visitó fue una niña joven, quien se identificó como la actuaria del sumario, pero no sabe su nombre.

No recuerda si patrocinó una causa civil a don Samuel Albornoz.

Las copias eran en blanco y negro y presentaban defectos en su parte derecho por impresión o tinta.

2.- Compareció don Juan Alfredo Iriarte Rojas, quien legalmente interrogado, manifestó:

Que es funcionario de la Municipalidad de Río Claro, por eso conoce a ambas partes. Él fue profesor y luego Jefe Técnico de la escuela Odessa.

A don Samuel lo despidieron por un sumario por el robo de otro sumario. El robo del sumario se lo atribuyeron a don Samuel.

Don Samuel, además de ser director fue concejal de Río Claro bajo la administración del padre del actual alcalde. Fue adversario de la administración de la familia Guajardo.

Don Samuel hizo una gestión que permitió obtener mayores recursos para la escuela, era cordial, respetuoso de todos sus funcionarios, nunca escuchó malos comentarios de él.

En cuanto al primer sumario, él estaba en el establecimiento y allí existía un procedimiento sobre presentación de la licenciatura respecto del corte de pelo. Atendido que los alumnos no cumplieron con la presentación personal, se le impidió la licenciatura. Sobre esto los padres demandaron discriminación y se hizo un sumario. Esto ocurrió el 2014.

Luego se abrió un segundo sumario por el robo del primero.

En esa época él era Jefe Técnico del colegio.

Él también fue sumariado y se le desvinculó, ante lo cual demandó al Municipio.

La desvinculación de don Samuel se hizo el 2018.

Contrainterrogado, dijo: Que existe un reglamento interno por convivencia escolar.

3.- Compareció don Gastón Rodolfo Ojeda Fernández, quien legalmente interrogado, expresó:

Samuel Albornoz fue director del colegio Odessa de Río Claro. Él era jefe comunal de educación de Río Claro. Don Samuel fue elegido por Alta Dirección Pública.

A don Samuel lo desvincularon por un sumario por el robo de un expediente. Los problemas con la Municipalidad de Río Claro se iniciaron a partir de una licenciatura y por decir las cosas claras a la autoridad comunal. Esto fue cayendo mal en el sistema.

En una ceremonia de licenciatura se presentó un niño con un corte de pelo no autorizado en el reglamento, no se le autorizó licenciarse con sus compañeros y se le hizo una ceremonia privada.

Don Samuel era miembro de un partido político, Renovación Nacional.

Este problema lo sabía el personal administrativo de la Municipalidad y de la comunidad.

Samuel decayó en su ánimo, tuvo crisis cardíaca. Era un hombre muy activo, ello bajó ostensiblemente.

El Alcalde era de Renovación nacional.

El hecho que a don Samuel se le sacara del registro público de directores de alta dirección público lo perjudicó en su carrera docente y en los concursos públicos posteriores. Esto afectó también las relaciones personales, no está tan sociable, está retraído.

Contrainterrogado, expresó: Respecto a la mala relación con la autoridad comunal data desde la época del Terremoto.

Es amigo con don Samuel Albornoz.

Como jefe de Daem y jefe técnico le consta que don Samuel fue borrado del registro público. Para borrarlo del registro tiene la potestad del jefe DAEM, esto ocurrió antes de la suspensión.

Absolución de posiciones.

Compareció en representación de la Municipalidad de Río Claro, Brian Robinson Pavez, quien legalmente interrogado, dijo:

A don Samuel los desvincularon por un sumario que concluyó en falta a la probidad. Le consta ello por el sumario.

Existe una querella porque se perdió material didáctico.

Hubo tres sumarios respecto de don Samuel.

Sexto: Prueba de la parte demandada. Que la parte demandada en la audiencia de juicio, a fin de acreditar sus alegaciones y defensas incorporó los siguientes medios de prueba.

Prueba documental.

1. Copia de Sumario Administrativo instruido por Decreto Alcaldicio de la I. Municipalidad de Río Claro N° 3344 de 08 de octubre de 2015.
2. Copia de vista fiscal o dictamen de sumario administrativo instruido por decreto alcaldicio N° 3942 de 29 de diciembre de 2014 de la I. Municipalidad de Río Claro.
3. Querella interpuesta por el Consejo De Defensa Del Estado en contra del demandante, don Samuel Antonio Albornoz Sánchez causa RIT 2465-2016 de fecha 14 de abril de 2016.
4. Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Río Claro N° 2865 de 4 de septiembre de 2018.
5. Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Río Claro N° 264 de fecha de 2 de mayo de 2013.

Oficios.

- 1.- Oficio remitido por el Ministerio Público.
- 2.- Oficio remitido por la Contraloría General de la República.

Prueba testimonial.

1.- Compareció don José Joaquín Lagos León, quien legalmente interrogado, manifestó:

Él en su calidad de abogado actuó como fiscal instructor en dos sumarios instruido por la Municipalidad de Río Claro en contra de don Samuel Albornoz.

Un primer sumario dice relación por un evento ocurrido en la Escuela Odessa, donde a dos alumnos no se les permitió licenciarse. El sumario se extravió, lo que dio origen a otro sumario.

En enero de 2018 se acumularon los sumarios y él fue designado fiscal para ambos sumarios. Él resolvió proponer como sanción término de la relación laboral.

Existe un tercer sumario, dice relación con el hecho que el año 2015 el Sr. Albornoz siendo director de la escuela de Odessa recibió material por el orden de 9 millones y cuando llegó el nuevo Director no existía nada. Surgió una causa penal por fraude al fisco. Esta causa está en tramitación y se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.

En el sumario de extravío se hicieron gestiones para que don Samuel restituyera el Sumario, la actuaria fue a la oficina del abogado de don Samuel quien le habría reconocido que don Samuel tenía el expediente.

Don Samuel va a ser reformatizado en la causa penal

Contrainterrogado, dijo: La reformatización no ha ocurrido.

El expediente del sumario se perdió el año 2015. La municipalidad hizo una denuncia, la que se acumuló a la causa penal y por ello se va a reformatizar.

El sumario por no dejar licenciar a los alumnos es de octubre de 2015.

El sumario por la pérdida, la tomó él en enero de 2018.

La demora en la resolución del sumario de pérdida del expediente fue porque no se podía reconstituir.

La sanción se determinó en octubre de 2018.

Él propone en el sumario la aplicación del artículo 71 del Estatuto Docente en relación con el 161 del Código del Trabajo. Las faltas sería impedir la licenciatura de tres alumnos de octavo básico y el hurto del expediente.

2.- Compareció don Mario Antonio Salazar Venegas, quien legalmente interrogado, expuso:

Es director de la escuela Odessa de Río Claro desde el 6 de marzo de 2015.

Antes de su llegada al colegio, no se licenció a unos alumnos de la escuela. En el reglamento interno se detalla la presentación personal y sobre el corte de pelo, señala que debe ser acorde a las actividades. Esto estaba vigente.

Séptimo: Que analizada la prueba rendida en autos en los términos del artículo 456 del Código del Trabajo, esto es, de acuerdo a las normas de la sana crítica, este sentenciador tiene por acreditado los siguientes hechos.

1.- Don Samuel Antonio Albornoz Sánchez, de profesión profesor, fue elegido por concurso de alta dirección pública director de la Escuela Odessa de la comuna de Río Claro el 2 de mayo de 2013, según da cuenta Decreto Alcaldicio N° 264.

2.- En su calidad de director de la Escuela de Odessa, don Samuel Albornoz fue sometido a un sumario administrativo mediante Decreto Exento N° 3.942 de 29 de diciembre de 2014, por la responsabilidad que le correspondía en la prohibición a licenciar a algunos alumnos de Octavo Básico de la Escuela Odessa, según se concluye de los antecedentes del sumario y lo ilustraron la declaración de todos los testigos que declararon en juicio.

3.- El expediente del referido sumario se extravió el 18 de mayo de 2015, atendido lo cual se instruyó investigación sumaria mediante Decreto Exento N° 3344 de 8 de octubre de 2015 de la Municipalidad de Río Claro, según da cuenta la referida resolución y que es parte de los antecedentes del sumario incorporados en juicio. Se refirieron a este segundo sumario todos los testigos que depusieron en autos.

Se imputó como autor del hecho del extravío al Sr. Albornoz Sánchez, según lo dijeron todos los testigos y así está determinado en los cargos del sumario y en su resolución final.

4.- Los sumarios iniciados mediante Decreto Exento N° 3.942 de 29 de diciembre de 2014 y mediante Decreto Exento N° 3344 de 8 de octubre de 2015 ambos de la Municipalidad de Río Claro, fueron acumulados, según lo dijo el testigo José Joaquín Lagos León, quien actuó como instructor en ambos sumarios, y así está establecido en los antecedentes sumariales incorporados en juicio por ambas partes.

5.- Mediante Decreto N° 3195 de fecha 4 de octubre de 2018 de la Municipalidad de Río Claro, se resolvieron ambos sumarios, decretándose lo siguiente, según da cuenta la referida resolución:

“a) Apruébese los sumarios administrativos ordenados instruir mediante Decreto Alcaldicio N° 3942, de fecha 29 de diciembre de 2014 de la I. Municipalidad de Río Claro y Decreto Alcaldicio de la I. Municipalidad de Río Claro N°3344 de 08 de octubre de 2015,

b) Aplíquese, en mérito de los antecedentes recopilados por el Fiscal, la sanción administrativa prevista en el artículo 72 letra b) de la ley 19.070.- Estatuto Docente, esto es, el término de su relación laboral por falta de probidad acreditada en sumario administrativo. Todo lo cual a la luz de lo prescrito en el artículo 71 del Estatuto Docente lo hacen incurrir, del mismo modo, en la infracción contemplada en el Artículo 160 numeral 1 letra a) del Código del Trabajo, esto es, la conducta

indebida de carácter grave, debidamente comprobada, que constituya una falta de probidad. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 145 inciso final de la Ley N° 18.883, procédase a anotar tal sanción en la hoja de vida funcionaría del Sr. Samuel Antonio Albornoz Sánchez.

c) Notifíquese al inculpado haciéndosele saber que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley N° 18.883, dispone de un plazo de 5 días hábiles para interponer recurso de reposición fundado.

Anótese, comuníquese, y notifíquese.

Firmado: Américo Gustavo Guajardo Oyarce, Alcalde; Sergio Venegas Contreras, Secretario Municipal.”

6.- Don Samuel Albornoz Sánchez, dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado, según da cuenta Decreto N° 3427 de fecha 25 de octubre de 2018 de la Municipalidad de Río Claro.

EN CUANTO A LA ACCIÓN DE TUTELA.

Octavo: Que en autos, se ha ejercido acción tendiente a proteger derechos fundamentales que la legislación vigente consagra a los trabajadores. Sobre el particular, con la publicación de la Ley N° 20.087 se incorporó un mecanismo de protección o de tutela calificada que sólo protege un tipo de derechos: los derechos fundamentales del trabajador, procedimiento, que es la traducción procesal de la idea de la eficacia horizontal de este tipo de derechos en las relaciones jurídicas entre privados, y en este caso particular, al interior del contrato de trabajo y es más, se trata no sólo de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre particulares, sino de su eficacia inmediata o directa en cuanto la acción procesal se ejerce directamente por el trabajador, entre otros sujetos pasivos, en contra de otro particular involucrado en la relación laboral: el empleador.

Que en este procedimiento de tutela laboral, como ya es posible colegir, el bien jurídico protegido, son los derechos fundamentales: así, la pretensión de la acción de tutela es la protección y resguardo de cierto tipo de derechos de los trabajadores – los doctrinariamente denominados fundamentales inespecíficos- buscando el restablecimiento en el ejercicio del derecho lesionado y la reparación del daño producido por su vulneración, cuando dicha afectación provenga del ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador. Ahora, bien, en rigor el bien jurídico protegido por la acción de tutela no son los

derechos fundamentales sin identidad, ni siquiera los derechos fundamentales previstos expresamente en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, sino, que lo protegido son los derechos fundamentales del trabajador previstos expresamente en la lista contemplada de forma taxativa en el artículo 485 del Código del Trabajo, en la cual se distinguen dos tipos, según su origen: a) los de fuente constitucional, previstos en el artículo 19 del texto fundamental y; b) los de fuente legal: un solo derecho que corresponde al derecho a no ser objeto de represalias laborales, derecho a la indemnidad laboral.

Noveno: Que en el caso que nos convoca la demandante ha fundado el ejercicio de su acción de tutela en una presunta vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1, inciso 1° de la Constitución Política de la República, consistente en el derecho a la integridad psicológica, como consecuencias de actos ocurridos durante la vigencia de la relación laboral, y que dicen relación con la instrucción de dos sumarios administrativos, su tramitación y la destitución del cargo como consecuencia de ello; y la garantía del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, derecho a la honra, por habersele desvinculado vejatoriamente, al habersele tratado de ladrón sin respeto a los principios del debido proceso y sin respetar los plazos del proceso de sumario administrativo que se le realizó.

Corresponde, en consecuencia, entrar a dilucidar, primeramente, la existencia de los hechos denunciados, y si existieren, si constituyen vulneración de los derechos fundamentales que se señalan.

Décimo: No existe controversia sobre el hecho que el actor era Director de la Escuela Odessa de la comuna de Río Claro y que fue sometido a dos sumarios administrativos y que ambos concluyeron con la resolución que dispone el término de la relación laboral que lo unía con la Municipalidad de Río Claro, situación además que se ha tenido por acreditada en la forma descrita en el considerando séptimo.

Undécimo: Que los trabajadores del sector municipal se rigen en su relación laboral por la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, siendo aplicables a los trabajadores de la educación municipal lo pertinente a la Investigación sumaria, artículos 127 a 143, por remisión expresa del Estatuto Docente en el artículo 72.

Atendido los antecedentes del sumario incorporados a la causa, se constata que el referido sumario fue instruido sobre la existencia de antecedentes reales, la negación a licenciarse junto a sus compañeros a dos alumnos de octavo básico de la Escuela Odessa de la comuna de Río Claro y el extravío del expediente del sumario administrativo por el cual se investigaban tales hechos. Refiriéndose sobre tales situaciones todos los testigos que declararon en juicio.

Ahora bien, este sentenciador no entrará a juzgar si la decisión del Alcalde y las resoluciones del Fiscal, se ajustan o no a derecho, por carecer de competencia para ello y no ser este el procedimiento para revisar resoluciones del órgano municipal en materia disciplinaria, correspondiendo en el caso del sumario administrativo incoar los actos de impugnación que el ordenamiento aplicable dispone.

Por consiguiente, las medidas tomadas dentro de la investigación sumaria, en especial la separación provisional, manteniendo el pago de las remuneraciones, hecho que el misma demandante refirió en su libelo, lo que también se ve reflejado en las liquidaciones de remuneraciones incorporadas en juicio, se ajustan a la racionalidad esperada y las medidas son proporcionales a los hechos que se tomaron en cuenta para proceder con la investigación.

En lo que dice relación con la tardanza en la tramitación de los sumarios. La entidad demandante manifestó que ello se debió a la pérdida del primer sumario y los problemas en su reconstitución, como así también al cambio de fiscal instructor en atención a que el primer designado habría dejado de ser funcionario municipal por asumir un cargo gubernamental.

La pérdida del expediente es un hecho probado, de ahí que sea entendible que la tardanza en la tramitación del primer sumario tiene una explicación racional. A lo que hay que agregar que efectivamente se nombró un nuevo fiscal en la investigación, según se lee en el mismo sumario, atendido que el nombrado originalmente asumió un cargo gubernamental, según lo dijo el testigo José Joaquín Lagos León, quien actuó como fiscal instructor en los dos sumarios, agregando este testigo que por decisión suya optó por acumular ambos sumarios. Tal hecho, solo puede conducir a que ambos sumarios terminen en el mismo tiempo y por una única resolución, situación que así ha sido demostrada mediante Decreto N° 3195 de fecha 4 de octubre de 2018 de la Municipalidad de Río Claro, por el que se resolvieron ambos sumarios.

Décimo quinto: Respecto de la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

El derecho a la integridad física de la persona humana comprende la preservación y funcionamiento de todos los miembros y órganos que le permiten manifestarse como tal, y en todas las expresiones que conforman su específica naturaleza, potencialidad y aptitudes. Por su parte, la integridad psíquica, no sólo implica el aspecto moral de la personalidad, sino que va más allá, considerando la estabilidad emocional del individuo.

Si bien se concluyó que los hechos denunciados como vulneratorios tiene una explicación lógica racional, y para nada arbitraria e irracional, lo que permite concluir que de existir problemas de orden psicológico, ello no puede ser imputado al empleador, toda vez que no existe un acto doloso o culposo en tal sentido, más aún cuando las medidas tomadas por el empleador se ajustan a la legislación legal vigente.

Es más, el demandante de autos, hizo uso de los derechos que la legislación le proporciona, planteando el correspondiente recurso de reposición.

Al respecto es necesario tener presente, que lo que se está impugnado por esta vía, es un procedimiento administrativo y su correspondiente resolución, a lo que reitero que la vía judicial laboral, no es el camino para lograr la impugnación de dicho acto administrativo.

Décimo sexto: En cuanto al derecho a la honra, consistente en la fama y el buen nombre, que en palabras del actor habría sido vulnerada al ser acusado de ladrón e intentarlo privar de libertad por interposición de una querella.

Sobre tal hecho, es necesario tener presente que el extravío del expediente del sumario iniciado mediante Decreto Exento Decreto Exento N° 3.942 de 29 de diciembre de 2014, y que originó un segundo sumario, es un hecho que por sí constituye presuntivamente la constitución de un delito, y por tanto obliga a la autoridad ejercer las acciones penales correspondientes para iniciar la investigación penal por los organismos pertinentes, artículo 175 del Código Procesal Penal, por lo que la interposición de una querella en tal sentido, según se desprende los antecedentes remitidos por la Fiscalía Local de Talca, no es más que el ejercicio de una obligación legal y un derecho que tiene todo Chileno para iniciar acciones penales en la medida que ocurran hechos presuntivamente

constitutivos de ilícitos. Si en la eventualidad la querella resultase calumniosa, ello debe ser declarado por el tribunal que corresponda, más no en sede laboral.

En cuanto al hecho que el la demandada haya pretendido privarlo de libertad, ello no implica la vulneración del derecho que se reclama, toda vez que tal pretensión solo es procedente en un proceso penal legalmente tramitado y la privación de libertad como medida cautelar no obedece a la sola intención de algún interviniente.

En consecuencia, a juicio de este sentenciador procede rechazar la demanda de tutela en esta parte.

EN CUANTO AL DESPIDO INJUSTIFICADO.

Décimo séptimo: Que el despido del actor obedeció a lo resuelto en los sumarios administrativos incoados en su contra, proponiéndose mediante resolución de fecha 24 de septiembre de 2018 dictada por el Fiscal instructor don José Joaquín Lagos León el término de la relación laboral por falta de probidad acreditada en sumario administrativo. Siendo acogida por el Alcalde de Río Claro tal propuesta, dictándose el Decreto N° 3195 de fecha 4 de octubre de 2018 de la Municipalidad de Río Claro, por la cual se decreta el término de la relación laboral por falta de probidad acreditada en sumario administrativo.

Recurrida dicha resolución, mediante recurso de reposición, este fue rechazado según da cuenta Decreto N° 3427 de fecha 25 de octubre de 2018 de la Municipalidad de Río Claro.

Décimo octavo: Sobre el término de la relación laboral de los funcionarios de la educación está reglamentada en el artículo 72 del Estatuto Docente, y respecto del caso de autos, le sería aplicable lo estatuido en la letra b) de dicha norma, que dice:

“Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales:”

“b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”.

“En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un

profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor”.

En cuanto al caso del actor, está probada la existencia de los sumarios administrativos en su contra, la resolución que tiene por probado los hechos y propone la sanción y el Decreto alcaldicio que acoge la propuesta y decreta el término de la relación laboral por falta de probidad, razón por la cual, a juicio de este sentenciador, los presupuesto legales de la norma transcrita están acreditados, por lo que el despido del actor se ajusta a derecho.

Se vuelve a reiterar que no se entrará a conocer la tramitación del sumario y sus resoluciones, toda vez que ello no es competencia de este tribunal.

Por lo expuesto procede rechazar la demanda por despido injustificado y consecuentemente las prestaciones derivadas de dicha declaración como así también el lucro cesante y la declaración de daño moral.

Décimo noveno: Que la demandante alegó el perdón de la causal. Tal alegación será rechazada en atención a que la causal del despido dice relación con el resultado de los sumarios, plasmado en el Decreto por el cual se pone término a la investigación, se determinó responsabilidades y se aplicó la sanción pertinente, más no con los hechos que motivaron el sumario, situación que este sentenciador no corresponde entrar a conocer y cuestionar, como ya se dijo.

OTRAS PRESTACIONES.

Vigésimo: Que el actor en su libelo de tutela y de despido injustificado, solicitó que se declarara que al término de la relación laboral su remuneración ascendía a la suma de \$1.722.174, en atención a que no se le habría cancelado la asignación por tramo en la forma que legalmente le correspondía.

Sobre tal hecho la demandada nada dijo al contestar ambas demandas, por lo que se hará aplicable lo dispuesto en el artículo 543 N° 1 del Código del Trabajo, teniéndose por tácitamente admitido tal hecho, por lo que se accederá a la demanda en esta parte, debiendo la Municipalidad de Río Claro cancelar al actor la suma de \$1.722.174 por concepto de asignación de tramo.

Vigésimo primero: Que también se solicitó el reintegro de lo descontado de la remuneración por concepto de “descuento sumario”, la suma de \$301.798.

Efectivamente en la liquidación del mes de octubre de 2018 se constata la existencia de un descuento por la suma de \$301.798 bajo la glosa “descuento sumario”.

Sobre dicho descuento, la demandada al contestar la demanda nada dijo sobre su procedencia y tampoco dio alguna explicación sobre ello, por lo que al no existir fundamento jurídico o alguna explicación que haga plausible tal descuento, se accederá a su reintegro.

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 118, 120, 123, 138, 139 de la Ley N° 18.833, artículos 1, 72 letra b) del Estatuto Docente, y artículos 1, 63, 160 letra a), 173, 453 N° 1 y 456 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que se rechaza la demanda por tutela laboral deducida por don Samuel Antonio Albornoz Sánchez, en contra de la Ilustre Municipalidad de Río Claro, representada por su alcalde, don Américo Gustavo Guajardo Oyarce, ya individualizados.

II.- Que se rechaza la demanda por despido injustificado deducida por don Samuel Antonio Albornoz Sánchez, en contra de la Ilustre Municipalidad de Río Claro, representada por su alcalde, don Américo Gustavo Guajardo Oyarce, ya individualizados.

III.- Que se accede a la demanda deducida por don Samuel Antonio Albornoz Sánchez, en contra de la Ilustre Municipalidad de Río Claro, representada por su alcalde, don Américo Gustavo Guajardo Oyarce, ya individualizados, solo en cuanto la demandada deberá cancelar al actor las siguientes prestaciones.

a.- La suma de \$1.722.174, por concepto de asignación de tramo.

b.- La suma de \$301.798, por reintegro de lo descontado por “descuento de sumario”.

Las sumas ordenadas pagar deberán interés y reajuste en los términos que dispone el artículo 63 del Código del Trabajo.

IV.- Que no se condena en costas a la parte demandante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese, regístrese, remítase copia de la sentencia vía correo electrónico y archívese en su oportunidad.

RIT T-195-2018

RUC N° 18-4-0154684-3



Dictó don **JUAN MARCELO BRUNA PARADA**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.

Talca, treinta y uno de enero dos mil veinte, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.

